



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ejecutivo
EJECUTANTE	Poliana Doncheva Vasileva
EJECUTADOS	Colpensiones Protección S.A.
RADICADO	05-001-31-05-010-2023-00028-01
TEMA	Mandamiento de pago
DECISIÓN	Confirma el auto recurrido

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, procede a dictar auto interlocutorio de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo promovido por **POLIANA DONCHEVA VASILEVA** contra **COLPENSIONES** y **PROTECCIÓN S.A.**, con radicado 05-001-31-05-010-2023-00028-01.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **N° 089**, aprobada por los integrantes de la Sala.

- **AUTO RECURRIDO:**

Mediante auto del 10 de febrero de 2023, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín negó el mandamiento de pago en favor de Poliana Doncheva Vasileva, en contra de AFP Protección S.A. y Colpensiones, al considerar que lo pretendido por el ejecutante es la corrección de la historia laboral, asunto que no es objeto del proceso ejecutivo.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la ejecutante, quien a través de su mandataria judicial lo sustentó en los siguientes términos: *“El presente recurso se encuentra encaminado para que el honorable Tribunal Superior de Medellín revoque la decisión y se ordene al A quo, que libre mandamiento ejecutivo en relación con la obligación de hacer, clara, expresa y exigible que ha dispuesto el juez de conocimiento en la sentencia de instancia y confirmada por este Honorable Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral (...) Así entonces, luego de haberse solicitado el cumplimiento de la anterior decisión, Protección indicó que, procedió en efecto con la devolución de todos los aportes realizados por la demandante a aquella administradora de pensiones, aportes que, si se advierte de manera detallada en relación con los que se indican dentro de esta demanda ejecutiva, ante la AFP Protección aparecen satisfechamente aportados por un total de 30 días, lo que conlleva a concluir que si lo que se declaró por el despacho laboral correspondió a la ineficacia del acto de traslado, es decir, la inexistencia del mismo, las cosas vuelven a su estado anterior, sin que deban sufrir ninguna clase de desmejora o afectación para la afiliada. Conforme lo indicado, si la AFP Protección verdaderamente devolvió a Colpensiones como lo indica en su escrito de cumplimiento de la decisión, Colpensiones tendría en su defecto que contabilizar el total de los días que la señora Poliana a través de empleador realizó por un total de 30 días. No tenerlo así, ante la declaratoria de ineficacia con la devolución de todos los aportes y rendimientos sin descontar los gastos de administración, ni cuotas de seguros provisionales como lo ordenó la sentencia de instancia, sería incumplir con la obligación de hacer que de manera expresa y clara se impuso en la decisión de instancia. En ese orden, al tenerse que lo pretendido con la ejecución mediante la presente demanda consiste en que Protección S.A., devuelva de manera completa y satisfecha el aporte por el número de días realizado por la demandante como trabajadora dependiente y, adicionalmente, Colpensiones lo contabilice como tal, de forma completa, corresponderá en efecto a tramitarse mediante el presente proceso ejecutivo puesto que se trata de un incumplimiento de la obligación expresamente impuesta en una sentencia judicial”*

- **ALEGATOS:**

Las partes no formularon alegatos.

CONSIDERACIONES:

El auto recurrido, conforme lo preceptúa el numeral 8° del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es susceptible del

recurso de apelación, toda vez que el mismo resuelve sobre el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, por lo que es válido que el Tribunal asuma el conocimiento del mismo.

Pretende la señora Poliana Doncheva Vasileva se libre mandamiento de pago en su favor y en contra de Protección S.A. y Colpensiones, así: *“Por la obligación de hacer a cargo de PROTECCIÓN S.A., de trasladar a COLPENSIONES todos los aportes que ha realizado la señora POLIANA DONCHEVA VASILEVA en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos que se hubieren generado, sin descontar comisiones o cuotas de administración, y COLPENSIONES a recibirlos asentándolos efectivamente de manera completa en la historia laboral de la demandante por periodos completos (...) Por la suma de 1.786.328 (un millón setecientos treinta y ocho mil trescientos veintiocho pesos m/l) que por costas y agencias en derecho fue condenado protección S.A.”*; por su parte, el juzgado del conocimiento negó librar mandamiento de pago, al considerar que lo pretendido por la actora es la corrección de la historia laboral, asunto que escapa de la órbita del proceso ejecutivo. Con relación a la condena por costas procesales, señaló que la suma reclamada se encuentra a disposición en el despacho para su pago.

Atendiendo a la apelación formulada, el problema jurídico que abordará esta Sala del Tribunal se circunscribe en determinar si el proceso ejecutivo es la vía para solicitar la corrección de la historia laboral, en atención al traslado de los aportes realizados ante Protección S.A. con destino a Colpensiones.

Pues bien, el proceso ejecutivo parte de que exista certeza sobre el derecho reclamado, la cual debe estar contenida en un título que preste mérito ejecutivo, que debe cumplir unas condiciones esenciales, a saber: a) que haga prueba por sí mismo sin necesidad de complementarlo con algún reconocimiento, cotejo o autenticación; b) que mediante el mismo se pruebe la existencia de una obligación patrimonial determinada, líquida, lícita y exigible en el momento en que se inicial el juicio; y c) que ofrezca plena certeza frente a la titularidad del crédito – acreedor- y ante quien puede ser exigido – deudor-.

Los requisitos de que la obligación sea expresa, clara y exigible, merecen entenderse en su cabal significado.

Obligación expresa. Esto significa declarar precisamente lo que se quiere dar a entender. El documento entonces debe contener una obligación expresa, es decir, debe consignarse en él, el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación se ha estipulado.

Obligación clara. La claridad hace relación especialmente a su inteligibilidad, es decir que no sea equivoca ni confusa y que únicamente pueda entenderse en un solo sentido.

Obligación exigible. La exigibilidad significa que la obligación pueda pedirse, cobrarse o demandarse. La obligación es exigible cuando válidamente puede pedirse o demandarse su cumplimiento al deudor. El plazo y la condición constituyen dos hechos que impiden la exigibilidad. El *plazo* es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. La *condición* es un acontecimiento futuro que puede suceder o no y suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se produzca el advenimiento del hecho.

Considera esta Sala del Tribunal que la obligación que pretende cobrar la ejecutante por concepto de la actualización de los períodos reportados en la historia laboral a cargo de Colpensiones no está acreditada en un título ejecutivo, toda vez que de las sentencias proferidas en el proceso ordinario nada se ordenó respecto de este concepto en su parte resolutive.

La Corte Constitucional de vieja data se ha pronunciado acerca de los momentos que confluyen en la formación del juicio que formula la autoridad judicial, indicando sobre la parte resolutive que, es aquella que resuelve la controversia que originó el proceso. Así se pronunció en sentencia C-548 de 1997:

“Esos momentos son: el cognoscitivo, que supone el conocimiento cierto de los hechos y de las demás circunstancias relevantes del conflicto y la determinación de las normas válidas para la solución del mismo; el valorativo, que consiste en la evaluación de tales hechos a la luz de las normas que se juzgan pertinentes para ello, pues precisamente se refieren, en abstracto, a las conductas que el juez ha identificado en concreto; y el decisorio, que se manifiesta en la parte resolutive del fallo, cuya finalidad es resolver la controversia que originó el proceso, o hacer las declaraciones que

se demandan. Estos momentos se desarrollan a través de las etapas que determinan las leyes procesales”

Lo anterior obedece a que, en sentencia del 15 de mayo de 2019, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín se declaró la ineficacia del traslado de la señora Polania Doncheva Vasileva al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones a Protección S.A., entendiéndose como consecuencia que estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad. Asimismo, se le ordenó Protección S.A. trasladar a Colpensiones todos los aportes realizados por la afiliada en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos que se hubieran generado y las comisiones o cuotas de administración. Finalmente, se le ordenó a Colpensiones a reactivar la afiliación de la demandante.

La decisión anterior fue recurrida en apelación, la cual fue resuelta a través de sentencia del 18 de febrero de 2020, en la que Sala del Tribunal resolvió “*Se MODIFICAN las sentencias, en cuanto a los valores a devolver al fondo público, y en su lugar, se le ORDENA a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES, además de lo ordenado por los jueces, las cuotas de administración debidamente indexadas, los seguros provisionales y lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ACLARANDO que en el proceso de los señores DONCHEVA VASILEVA, PINEDA RICO, BETANCUR BETANCUR y VELÁSQUEZ ACOSTA la orden dada a PROTECCIÓN S.A. con respecto devolución de las cuotas de administración, se deberá efectuarse con su debida indexación”*

Nótese entonces que lo actualmente pretendido por la ejecutante, esto es, que a través de la obligación de hacer se le ordene a Colpensiones a recibir los aportes que realizó ante Protección S.A., asentándolos efectivamente de manera completa en la historia laboral por períodos completos, no fue objeto de decisión en las sentencias mencionadas, toda vez que, la orden que se le dio a Colpensiones estuvo dirigida únicamente a que reactivara la afiliación de la demandante, sin que se hiciera mención alguna a la forma como debía asentarse la información en la historia laboral.

Y es que, en términos de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en sentencia del 9 agosto 1989 “*Si el título o documento que puede servir de base para el ejercicio del derecho de acción, no ofrece la plenitud probatoria que exige el artículo 488 del C. de P.C., contra quien debe ser demandado, a así lo considera quien va a*

promover la actuación, resulta pertinente seguir el trámite del proceso ordinario, a fin de lograr los pronunciamientos que esclarezcan la situación litigiosa que imponga las condenas que fuesen necesarias.”

Corolario de todo lo dicho, se **CONFIRMARÁ** el auto recurrido por vía de apelación ante la ausencia de título ejecutivo que soporte la pretensión formulada por la ejecutante.

En esta instancia no se causaron costas procesales.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,**

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** el auto recurrido en apelación de fecha y procedencia conocida.

Sin costas procesales en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 082 del 16 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>